



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTIUNO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI**

Auto interlocutorio No. 380

RADICACIÓN: 76001-33-33-021-2020-00087-00
ACCIONANTE: LUIS HERNÁN HERNÁNDEZ SALAS
ACCIONADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (V)
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Santiago de Cali, 17 de mayo de 2022

A continuación, se deciden las medidas cautelares solicitadas con la demanda formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

ANTECEDENTES

El señor Luis Hernán Hernández Salas presentó demanda contra el municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad de Cali (V), procurando la nulidad de las Resoluciones No. 000000648012719 del 03 de enero de 2019 y 4152.010.21.0.9565 del 09 de diciembre de la misma anualidad, con las cuales se impuso sanción dineraria al demandante, la cancelación de licencia de conducción e inmovilización del vehículo y se resolvió el recurso de apelación impetrado.

Como restablecimiento del derecho pidió disponer la devolución de la licencia de conducción, exoneración de la multa y lo que se derive del mismo acto sancionatorio, condenando al ente territorial al reconocimiento y pago, a título de indemnización, los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que se causaron.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 229 y SS del CPACA, formuló solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos enunciados y pidió, a modo de consecuencia, ordenar la suspensión provisional de la ejecución del mandamiento de pago No. 1969641312 del 10-09-2019, emitido por la Secretaría de Movilidad de Cali, por la sanción impuesta al actor por valor de \$37'499.040.

De acuerdo con lo permitido por el art. 231 del CPACA, la vulneración predicada respecto de los artículos 2, 6 y 29 de la Constitución Política de 1991; los artículos 135, 136 y 146 del Código de Tránsito y Transporte (Ley 769 de 2002); el artículo 6 de la ley 1696 de 2014; el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 y la Resolución No. 1844 de 2015, se basó esencialmente en la no observación del derecho al debido proceso del sr. Luis Hernán Hernández Salas.

Como sustento de ello se manifestó que se omitió el proceso contravencional de que trata las normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cercenando su derecho a la defensa. Se agregó que la prueba con base en la cual se resolvió la situación jurídica es ilegal por cuanto no se elaboraron los documentos requeridos para sustentar la confiabilidad de la misma y, finalmente, porque las decisiones administrativas de primera y segunda instancia carecen de motivación fáctica y jurídica, además de estar falazmente motivada.

TRÁMITE

A la solicitud se le corrió traslado mediante el auto interlocutorio No. 205 del 20 de septiembre de 2020 pero, en virtud de la dificultad presentada con la notificación realizada en esa oportunidad, la Secretaría del Despacho procedió nuevamente con la actuación el 25 de abril del corriente año, significando esto que lo dispuesto en el segundo inciso del

artículo 233 del CPACA, sobre el traslado, ocurrió del 26 de abril al 02 de mayo del presente año, como se puede desprender del expediente digital.

De otra parte, se constató que dentro del tiempo otorgado y a través del apoderado designado para el efecto, se formuló oposición contra las medidas cautelares pedidas aseverando que a partir de las afirmaciones y solicitudes hechas por la parte actora no se desprende un perjuicio irremediable y que fue en razón de la infracción de tránsito en que incurrió el Sr. Hernández Salas, que la Secretaría de Movilidad de Cali aplicó el Código Nacional de Tránsito sancionándolo.

Por lo expuesto concluyó afirmando que mal podría interpretarse que con la actuación de la entidad y el cumplimiento de las funciones del agente de tránsito se generara un perjuicio irremediable, agregando que al demandante se le sorprendió ejerciendo un transporte informal, lo que contraría la Ley 769 de 2002.

Finalizó pidiendo la negación de las medidas cautelares, añadiendo que no hay prueba sumaria de los perjuicios reclamados¹.

Así las cosas, se estima que el Despacho se encuentra en tiempo para proceder con lo pertinente.

CONSIDERACIONES

La Ley 1437 de 2011 o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) determinó la procedencia de medidas cautelares de carácter preventivo, conservativo, anticipativo o suspensivo, las cuales deben conservar relación directa con las pretensiones de la demanda y comportar carácter de necesidad, enfocado en la protección y garantía del objeto procesal de forma provisional y la efectividad de la sentencia, siendo el decreto de las mismas un acto que no constituye prejuzgamiento².

Si se trata de suspensión provisional, deberá demostrarse la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud (si se presentó en escrito separado), cuando la misma derive del acto enjuiciado y la confrontación con los preceptos superiores o del estudio generado por las pruebas sustento de la solicitud.

Como se advirtió previamente, la parte accionante solicita la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones No. 000000648012719 del 03 de enero de 2019 y 4152.010.21.0.9565 del 09 de diciembre de la misma anualidad, con los cuales se sancionó al demandante con el pago de \$37'499.040, la cancelación de licencia de conducción e inmovilización del vehículo en que se transportaba y se resolvió el recurso de apelación impetrado respectivamente.

Sin embargo, de lo consignado en el documento de la parte actora no es posible extraer que con lo pretendido se proteja y garantice de manera provisional el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Lo anterior se afirma, en virtud de lo anotado en el acápite de medidas cautelares donde expresamente se aludió, a modo de consecuencia de la adopción de las mismas, a la orden de suspensión provisional de la ejecución del mandamiento de pago No. 1969641312 del 10-09-2019, lo cual permite afirmar que el verdadero propósito de la actuación es impedir el curso del trámite de cobro ejecutivo encaminado en sede administrativa.

¹ Memorial allegado al expediente digital el 02 de mayo de 2022, mediante correo electrónico.

² C.E. Providencia del 11 de marzo de 2014, Expediente 2013-00503-00, Consejero Ponente Guillermo Vargas Ayala.

Así, a criterio de este juzgador, la razón de la solicitud es evitar que prosiga el trámite del cobro coactivo que adelantó la administración, siendo esto un objetivo que puede ser logrado con otros medios procesales igualmente contemplados en el CPACA.

La discusión suscitada se sustentó en los actos administrativos enjuiciados y el trámite surtido en sede administrativa con motivo del comparendo No. 76001000021617161 del 29 de noviembre de 2018, pero de su revisión solo se pudo derivar la existencia de diferencias que son propias del trasiego judicial impetrado, sin poder inferir la necesidad de pretermir el transcurso normal del litigio hasta cuando se profiera sentencia en el asunto o, lo que es igual, con posterioridad al agotamiento de las actuaciones que están diseñadas para estos casos.

En otras palabras, la verdadera intención de las medidas no es la protección y garantía de la razón de este proceso ni la efectividad de la decisión definitiva, lo cual se reafirma con lo visto en la demanda que no presenta referencia a la existencia de un perjuicio irremediable que derive del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido y por el cual, eventualmente, hubiera procedido lo pedido.

Concluyendo, de las resoluciones sometidas a juicio y de las pruebas allegadas al plenario hasta el momento, no se extrae la vulneración de las normas de rango superior que se reseñaron en la demanda y tampoco se evidenció la inminencia de configuración de un perjuicio irremediable que ameritara la acogida de la petición cautelar.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali,

RESUELVE:

1.- NEGAR las medidas cautelares consistentes en la suspensión provisional de las Resoluciones No. 000000648012719 del 03 de enero de 2019 y 4152.010.21.0.9565 del 09 de diciembre de la misma anualidad, formulada por la parte actora.

2.- CONTINUAR con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Carlos Eduardo Chaves Zuñiga
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
021
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d3822dfd128002032e16442620144ed066ea9a81b7d0556356ed41b202053c72**

Documento generado en 17/05/2022 03:46:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>